

# Anexo B

---

## EXPEDIENTES AGRUPADOS POR UN NÚMERO SIGNIFICATIVO DE CIUDADANOS





- 252.246 peticionarios (en grupos de 146.755, 98.190, 589, 4.443, 1.320, 143, 404 y 402), entre los que se encuentran una plataforma de representantes de personas con discapacidad; empleados públicos afectados; asociaciones profesionales; sindicatos representativos de los intereses del personal funcionario, estatutario y laboral al servicio de las distintas administraciones públicas o de entidades del sector público estatal; entidades empresariales y mercantiles, y numerosos ciudadanos, a título particular, solicitan la interposición de recurso de inconstitucionalidad contra diversos preceptos del Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad. En particular, en relación con la modificación de la Ley 30/2006, de promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia; respecto a los conciertos educativos; sobre la modificación de los tipos de gravamen del IVA; en cuanto a la modificación de ayudas financieras para la adquisición o rehabilitación de viviendas; sobre la supresión de bonificaciones en las cuotas de la Seguridad Social a determinados supuestos por contratación, mantenimiento del empleo o fomento del autoempleo, y acerca de la limitación a la salida de España por los demandantes de la Renta Activa de Inserción, entre otras cuestiones. (Véase anexo E.5.)
- 2.828 habitantes, de diferentes localidades de la zona básica de salud de Sisante (Cuenca), muestran su disconformidad con el cierre parcial del punto de atención continuada (servicio de urgencias de 22 a 8 horas) de este municipio y su derivación, para atención urgente, al de la localidad de San Clemente (Cuenca), porque, entre otros motivos, prevén que se incrementará notablemente el tiempo de respuesta asistencial, se reducirá la dotación de transporte sanitario y por el significativo número de personas mayores que precisan continuamente atención sanitaria.
- 2.246 ciudadanos solicitan la interposición de recurso de inconstitucionalidad contra la Ley 10/2012, de 20 de noviembre, por la que se regulan determinadas tasas en el ámbito de la Administración de Justicia y del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses. (Véase anexo E.5.)
- 2.241 ciudadanos se quejan de la modificación operada en el pacto sobre la contratación de personal temporal del servicio de Salud del Principado de Asturias (SESPA), a consecuencia de la integración del «Hospital del Oriente de Asturias Francisco Grande Covián» en la red sanitaria pública asturiana, dispuesto por la Ley del Principado de Asturias 2/2010, de 12 de marzo.
- 1.546 personas manifiestan su disconformidad con la actuación de su entidad financiera, debido a la venta de participaciones preferentes sin la oportuna información.
- 992 ciudadanos reclaman por el contenido del proyecto de ley de tasas judiciales.

- 955 pacientes afectados trasladan su desacuerdo por el despido de un facultativo del servicio médico de hematología del Hospital de Torrevieja (Alicante).
- 955 jóvenes reclaman que tienen reconocida la renta básica de emancipación de los jóvenes sin haber recibido la ayuda correspondiente.
- 879 deportistas y aficionados de la pesca de las especies *Micropterus salmoides* (black bass o perca americana) y *Esox lucius* (lucio) protestan por la inclusión de estas dos especies en el Catálogo español de especies exóticas invasoras, lo que implica que pasan directamente al catálogo de especies que constituyen una amenaza grave para las autóctonas y, por tanto, sujetas a erradicación mediante su exterminio.
- 717 ciudadanos se manifiestan contra la retransmisión de festejos taurinos por parte de Televisión Española, en el horario infantil.
- 481 personas, entre las que se encuentra un concejal de la oposición del Ayuntamiento, manifiestan su disconformidad con ciertas determinaciones del Plan General de Ordenación Urbana de Navalcarnero (Madrid).
- 415 ciudadanos muestran su disconformidad con el valor catastral de las viviendas en la localidad de Algeciras (Cádiz) y solicitan la realización de una nueva ponencia general.
- 407 trabajadores adscritos a la Administración de la Generalitat de Cataluña se quejan de la situación de indefensión en la que consideran encontrarse los trabajadores y servidores públicos, como consecuencia de los recortes económicos y empeoramiento de sus condiciones laborales, así como una disminución de la calidad de los servicios públicos.
- 386 usuarios del nuevo hospital Son Espases, de Palma de Mallorca, denuncian que el aparcamiento de hospital no es público y gratuito, a diferencia de lo que acaecía en el antiguo hospital Son Dureta.
- 364 trabajadores de Telemadrid y Onda Madrid reclaman el amparo del Defensor del Pueblo ante el proceso de despido colectivo en que se encuentran.
- 320 ciudadanos reclaman por la supresión, en el municipio de Villarinos de Aires (Salamanca), del punto de atención continuada (servicio de urgencias de 22 a 8 horas), destacando que este municipio dista más de 30 minutos en medios habituales de locomoción del Centro de Salud de la zona básica.
- 208 personas, la mayoría miembros de una asociación de guardias civiles, ponen de manifiesto su desacuerdo con los impedimentos que las asociaciones profesionales de miembros del Cuerpo tienen para poder promover candidaturas para las elecciones de miembros de los órganos de representación, gobierno y dirección de la Asociación Prohuérfanos de la Guardia Civil.
- 187 ciudadanos de Barruelo de Santullán (Palencia), municipio que en 2010 contaba con una población de 1.400 habitantes, manifiestan su queja por la supresión de guardias médicas en su localidad, que dista 14 kilómetros del servicio de urgencias más próximo.
- 179 vecinos del municipio de Orea (Guadalajara), afectados por las determinaciones del nuevo Plan de Ordenación Municipal que incluye sus parcelas -situadas en suelo urbano consolidado- en una unidad de actuación que ha de ser objeto de desarrollo urbanístico,

con las obligaciones que ello conlleva para sus propietarios, se quejan de que las resoluciones denegatorias a sus alegaciones no fueron motivadas ni apoyadas en criterios técnicos y objetivos.

- 175 reclamantes, entre los que se encuentran diversos colegios oficiales de médicos, organizaciones sindicales, asociaciones, un elevado número de profesionales, una plataforma cívica y un número considerable de ciudadanos, a título particular, solicitan la interposición de recurso de inconstitucionalidad contra determinados preceptos del Real Decreto-ley 16/2012, de 20 de abril, de medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud y mejorar la calidad y seguridad de sus prestaciones. (Véase anexo E.5.)
- 158 inquilinos de cinco comunidades de viviendas propiedad de la Empresa Municipal de Vivienda y Suelo (EMVS) del Ayuntamiento de Madrid, manifiestan su disconformidad con el proyecto de venta de los inmuebles individualizados a una sociedad particular.
- 157 jóvenes plantean su queja por la interrupción, por parte del Ministerio de Vivienda, del abono de la renta básica de emancipación de los jóvenes.
- 156 personas trasladan su preocupación por la finalización del convenio de colaboración, para la prestación de asesoramiento jurídico a los internos en centros penitenciarios de la Comunidad Autónoma de Andalucía, entre el Ministerio del Interior, la citada comunidad autónoma y el Consejo Andaluz de Colegios de Abogados.
- 149 ganaderos reclaman poder negociar los precios de la leche, así como la presencia de un veterinario en el muelle de las industrias para controlar su calidad.
- 97 ciudadanos exponen su discrepancia con el tratamiento y regulación de las disposiciones legales relativas a los términos establecidos para la inclusión en el Régimen General de la Seguridad Social de las personas que participen en programas de formación, según el Real Decreto 1493/2011, y para la inaplicación de los mecanismos de inclusión en la Seguridad Social a los estudiantes universitarios que realicen prácticas académicas externas (becarios), de acuerdo con el Real Decreto 1707/2011.
- 77 ayuntamientos de distintos puntos de España trasladan a esta Institución los acuerdos adoptados por sus respectivos Plenos, manifestándose a favor de la guarda y custodia compartida de los menores, en caso de divorcio.
- 64 personas manifiestan su disconformidad con la actuación de la Policía Nacional en el transcurso de una manifestación de estudiantes en Valencia.
- 64 ciudadanos solicitan la interposición de recurso de inconstitucionalidad contra la disposición adicional septuagésima primera, en su apartado segundo, de la Ley 2/2012, de 29 de junio y, asimismo, contra el Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, sin concretar en este último punto los preceptos concretos que se cuestionan. (Véase anexo E.5.)
- 61 ciudadanos del ámbito territorial de la Comunidad de Madrid manifiestan su disconformidad con la supresión del reconocimiento de las concesiones de subvenciones directas para la adquisición de vivienda con protección pública (cheques-vivienda), que dispone el apartado 1 del artículo 20 de la Ley 4/2012, de 4 de julio, de modificación de la Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid para el año 2012, y de medidas urgentes de racionalización del gasto público e impulso y agilización de la actividad económica.

- 59 profesores manifiestan la preocupación que supone para numerosos aspirantes a las ayudas para becas y contratos de Formación de Profesorado Universitario que se convocaron en abril de 2012 y la modificación que sobre la misma se realizó en octubre de 2012, reduciendo el número de becas y estancias breves que se convocan, así como las ayudas para el traslado temporal y los importes máximos de las cuantías.
- 57 docentes del ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha muestran su desacuerdo con la supresión de la percepción de determinado complemento retributivo para el profesorado de los Cuerpos de Maestros de Educación Primaria adscritos al primer ciclo de educación secundaria.
- 40 investigadores afectados trasladan su inquietud ante la demora en la tramitación de la convocatoria correspondiente al año 2102, para la concesión de ayudas del Programa Nacional de Formación de Recursos Humanos de Investigación, dentro el Plan Nacional de Investigación Científica, Desarrollo e Innovación 2008-2011.
- 35 ciudadanos solicitan del Defensor del Pueblo la interposición de recurso de inconstitucionalidad contra el Real Decreto-ley 28/2012, de 30 de noviembre, de medidas de consolidación y garantía del sistema de la Seguridad Social (actualización de pensiones). (Véase anexo E.5.)
- 34 ciudadanos cuestionan la reducción de beneficiarios de transporte escolar gratuito en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, del que se han excluido a los alumnos que cursen el segundo ciclo de la educación infantil, el bachillerato y los ciclos formativos de grado medio, a raíz de la modificación de la Ley de Educación de la referida comunidad, operada por la reciente Ley de las Cortes de Castilla-La Mancha 1/2012, de 21 de febrero, de medidas complementarias para la aplicación del plan de garantías de servicios sociales.